



*Juan Torres - Emilio Ontiveros - Daniel Lacalle*

---

# HABLANDO SE ENTIENDE —♦ la ♦— ♦ GENTE ♦

---

*Un debate plural sobre la economía española*

*Una oda al diálogo y al respeto para remarcar  
aquellas cuestiones que, más allá de las  
ideologías, nos son comunes*

DEUSTO

# **Hablando se entiende la gente**

Un debate plural sobre  
la economía española

**DANIEL LACALLE  
EMILIO ONTIVEROS  
JUAN TORRES**



EDICIONES DEUSTO

© 2015 Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros y Juan Torres

© Centro Libros PAFP, S.L.U., 2015

Deusto es un sello editorial de Centro Libros PAFP, S. L. U.

Grupo Planeta

Av. Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

[www.planetadelibros.com](http://www.planetadelibros.com)

Diseño de cubierta: [microbiogentleman.com](http://microbiogentleman.com)

ISBN: 978-84-234-2106-0

Depósito legal: B. 17.240-2015

Primera edición: septiembre de 2015

Preimpresión: Victor Igual, S.L.

Impreso por Romanyà Valls, S.A.

Impreso en España - *Printed in Spain*

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web [www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com) o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

# Sumario

---

<b>Prólogo</b> . . . . .	11
--------------------------	----

## PRIMERA PARTE

### DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

<b>Daniel Lacalle</b> . . . . .	15
Ahorro . . . . .	19
La reforma financiera y los análisis de riesgo externos. . . . .	20
La reforma laboral . . . . .	21
Reducción significativa de la economía sumergida . . .	21
El recorte en gasto . . . . .	22
Competitividad . . . . .	23
Facilidad para crear empresas. . . . .	25
Deuda y política fiscal . . . . .	26
Paro y desigualdad . . . . .	30
Europa y política energética . . . . .	31
<b>Emilio Ontiveros</b> . . . . .	35
Introducción . . . . .	35

La expansión de la economía española hasta 2008 . . .	36
Impacto de la crisis. Evaluación de daños . . . . .	38
Inventario de daños . . . . .	41
La recuperación . . . . .	48
El patrón de crecimiento actual . . . . .	53
<b>Juan Torres</b> . . . . .	57
Un cambio de tendencia que no deja atrás la crisis . . .	58
<i>Una recuperación, de momento, demasiado débil</i> . . . . .	61
<i>Una recuperación singular desde el punto de vista del empleo</i> . . . . .	62
<i>Una recuperación endeudada</i> . . . . .	64
<i>Una recuperación basada en el más débil de los motores</i> . . . . .	65
¿Recuperación o simple alivio coyuntural? . . . . .	69
<i>El limitado alcance de la política monetaria</i> . . . . .	70
<i>La evolución de los precios del petróleo</i> . . . . .	71
<i>El ciclo político</i> . . . . .	71
<i>Profecías que se autoincumplen</i> . . . . .	72

## SEGUNDA PARTE

### SOLUCIONES

<b>Daniel Lacalle</b> . . . . .	79
Una España competitiva, próspera y de oportunidades . . . . .	79
Estado del Bienestar y servicios básicos . . . . .	86
I+D y educación . . . . .	87
El empleo, la competitividad y la productividad . . . . .	87
Una batería de medidas para aumentar la competitividad, captar inversión y mejorar la financiación . . . . .	89
Y de nuevo, la solución puede ser muy rápida y a coste cero . . . . .	93

La transparencia es la clave . . . . .	95
Reforma fiscal . . . . .	97
<b>Emilio Ontiveros</b> . . . . .	101
Introducción . . . . .	101
Premisas en la definición de las políticas económicas . . . . .	102
<i>Los gobiernos e instituciones importan</i> . . . . .	102
<i>Las políticas han de ser de oferta y de demanda</i> . . . . .	104
<i>Diferenciar lo urgente de lo importante</i> . . . . .	104
<i>Decisiones urgentes</i> . . . . .	105
<i>Lo importante: aprender lecciones y modernización</i> . . . . .	108
Diversidad en la estructura del sistema financiero . . . . .	120
Sistema fiscal más justo y competitivo . . . . .	121
Eficiencia de las administraciones públicas . . . . .	122
Demografía e inmigración . . . . .	124
Recapitulación . . . . .	125
<b>Juan Torres</b> . . . . .	127
Se necesita algo más que cambiar de tendencia:	
combatir nuestros problemas estructurales . . . . .	127
<i>Frenar la concentración de poder y la falta</i> <i>de competencia y mejorar nuestras instituciones</i> . . . . .	129
<i>Revertir los procesos de desindustrialización</i> <i>y el predominio de las actividades con bajo valor</i> <i>añadido</i> . . . . .	130
<i>Acabar con la dependencia empresarial del capital</i> <i>y de las decisiones públicas</i> . . . . .	131
<i>Superar el déficit social</i> . . . . .	131
<i>Equilibrar el mercado laboral</i> . . . . .	132
<i>Resolver el carácter traumático de nuestra</i> <i>apertura al exterior</i> . . . . .	133
<i>Frenar el deterioro medioambiental y la ineficiencia</i> <i>energética</i> . . . . .	135
<i>Combatir la desigualdad</i> . . . . .	135
¿Cómo generar más y mejor actividad económica y empleo? . . . . .	137
<i>Potenciar el mercado interno y generar</i>	

<i>demanda efectiva . . . . .</i>	137
<i>Aumentar la masa salarial y reducir</i>	
<i>la carga financiera de las familias. . . . .</i>	138
<i>Optimizar el rendimiento de la política fiscal . . . .</i>	139
<i>Desbancarizar la economía y garantizar</i>	
<i>la financiación mediante banca pública . . . . .</i>	140
<i>Hacer sostenible la deuda pública . . . . .</i>	141
<i>Aumentar nuestra capacidad de maniobra . . . . .</i>	142
<i>Actuar también sobre la oferta y modificar el modelo</i>	
<i>productivo . . . . .</i>	143
La puesta en marcha de la política económica . . . . .	143
<i>Acertar en el diagnóstico . . . . .</i>	143
<i>Definir (democráticamente) los objetivos</i>	
<i>de la política económica . . . . .</i>	145

### TERCERA PARTE

#### DEBATE

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? . . . . .	151
La respuesta a la crisis . . . . .	175
¿Hay recuperación? . . . . .	192
Soluciones para un futuro inmediato. . . . .	199
<b>Epílogo . . . . .</b>	213
<b>Gráficos ilustrativos . . . . .</b>	217
<b>Bibliografía recomendada . . . . .</b>	227

## Daniel Lacalle

---

Cuando analizamos la economía española, sobre todo tras una crisis tan profunda como la vivida en los últimos años, tendemos a olvidar el espectacular progreso alcanzado en los últimos treinta años. Los mayores críticos con la situación española suelen ser los ciudadanos de nuestro país, y eso es bueno, cuando se ofrecen soluciones constructivas. Desafortunadamente, cuando se ignora lo conseguido hasta hoy, que es muy relevante, se tiende a caer en la tentación de las soluciones de «romper la baraja», pensando —erróneamente— que «no podemos estar peor». Recordemos, pues, dónde estamos y cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos.

La entrada en la eurozona supuso un hito muy importante, ya que la mejora de la productividad y el crecimiento del país no dependían de factores tradicionalmente desestabilizadores, como las políticas de estímulo de demanda interna intervencionistas, que llevaban a los efectos «embudo» tradicionales en nuestra economía de enormes depresiones tras cortos periodos de euforia, o las mal llamadas devaluaciones competitivas. Recordemos que entre 1980 y 1996, la peseta se depreció más de un 50 % con respecto al dólar y al marco, el gasto público se duplicó en términos reales, la deuda pública sobre el PIB aumentó en 50 puntos, la inflación media anual se disparó al



7,2 % y, a pesar de todo, la tasa de paro entre 1982 y 1996 no bajó del 15 %.

El deflactor del consumo privado (el IPC) subió un 9,2 % anual medio en los años ochenta, y un 4,2 % en los noventa. Para hacernos una idea, en Alemania esas cifras fueron del 2,6 y el 1,9 %, respectivamente.

Así, la entrada en el euro incluye una serie de reformas estructurales que reducen los desequilibrios tradicionales de la economía española, que solían manifestarse en la balanza comercial excesivamente deficitaria, un mercado laboral rígido y precario y un sector empresarial orientado al mercado interior.

Esta nueva dinámica lleva a una apertura espectacular de la economía española sin precedentes entre 1996 y 2004. El cambio más relevante de la economía española se traducía en aprovechar la globalización y convertir a nuestras empresas en negocios deslocalizados y exportadores. Entre 1996 y 1998, y de forma clara entre 1999 y 2003, España se convirtió en exportador neto de capital.

En 1995, el peso de las exportaciones de bienes y servicios representaba el 22 % del PIB; en 2004 fue del 26 %, y alcanzaba el 35 % en 2014.

Entre 1990 y 2000, las exportaciones españolas subieron, en precios constantes, un 10 % anual, sólo superadas por Irlanda (15 %), mientras que Alemania (6 %), Francia (6 %) e Italia (7 %) quedaron por detrás. Esa tendencia no sólo no se rompió con una moneda única fuerte, sino que las exportaciones alcanzaron una cifra récord del 33 % del PIB, mientras el euro se revalorizaba contra el dólar y sus monedas de referencia.

El incremento de la actividad exportadora, el paso de empresas nacionales a multinacionales y la dinamización del mercado de trabajo fueron factores esenciales a la hora de generar riqueza y prosperidad, pero también han sido factores muy relevantes a la hora de afrontar una crisis que, de nuevo, se generaba desde el exceso de políticas de demanda.

España gastaba más de 200.000 millones de euros en obra civil —aeropuertos, AVE, ciudades de las artes, etc.— y se embarcaba en una burbuja inmobiliaria que permeaba a muchos

otros sectores: ante la «expectativa» de crecer más que nadie, infraestructuras, renovables, telecomunicaciones... Se creó una sobrecapacidad media —antes de estallar la burbuja— del 20 % (utilización industrial) para un futuro de crecimiento que nunca llegó. Volvíamos a caer en el error de las políticas de «estimular la demanda interna» para cubrir los desequilibrios con más desequilibrios. El déficit por cuenta corriente se disparaba al 10 % del PIB en 2008 mientras íbamos camino de incurrir en déficits anuales del 5 % al 10 %. En cuatro años España pasaba de tener una deuda pública muy baja y superávit a tener un grave problema de solvencia.

El ahorro bruto nacional cayó desde el 23,4 % del PIB en 2003 al 18,4 % en 2010, el menor en muchas décadas, muy lejos de las cifras de los años setenta.

La deuda privada —anunciada en tantas ocasiones como «el problema»— era preocupante, pero ninguna de las empresas o familias que se habían endeudado pedían prestado un 20 % más de sus ingresos. El Estado, sí. Y dicho Estado entró en la errónea dinámica de «sostener el PIB» gastando. La deuda pública se disparaba en casi 100.000 millones anuales con la excusa de los estabilizadores automáticos y la errónea decisión de «invertir» para suplir el estallido de la burbuja.

El ahorro privado cayó del 23 % del PIB en 1996 al 14 % en 2007... En 2014 ya se ha recuperado a niveles del 22-23 %.

El país solía construir unas 300.000 viviendas al año. Pero en 2006 ya eran casi 800.000. Las viviendas terminadas pasaban de 600.000 en 2006 y, sin embargo, se vendían menos de la mitad. En 2006 el parque de viviendas vacías superaba los 3 millones.

Mientras, los gobiernos autónomos, que controlaban las cajas, pedían dinero para acometer obras gigantescas. Más de 200.000 millones de euros en préstamos que pasaron a ser de difícil cobro o incobrables.

La deuda autonómica se mantuvo constante en el 5,5-6 % del PIB desde 2000 hasta 2007. Sin embargo, en 2010 ya alcanzaba el 11,4 %, el doble que a finales de 2007. En 2014 ronda el 22 % (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1310.pdf>).

Un sistema financiero excesivamente orientado a dicha burbuja de obra civil e inmobiliaria pasó a convertirse en un riesgo relevante. Las cajas públicas resultaron ser las más afectadas, precisamente por su cartera de préstamos a gobiernos locales, proyectos de infraestructuras regionales e hipotecas. Los préstamos de «menor riesgo» —a comunidades autónomas y entes públicos— se convertían en incobrables, y las hipotecas mostraban la verdadera cara del riesgo. La morosidad de la banca subía a casi un 13 %. A medida que se iba descubriendo parte del agujero se introducía la duda en los mercados internacionales sobre la magnitud del problema. Como entidades no cotizadas, era prácticamente imposible conocer la exposición real de las cajas a los riesgos que se acumulaban.

Cabe resaltar el riesgo asumido al prestar a los promotores inmobiliarios. La morosidad en las hipotecas era del 6 % aproximadamente (34 mil millones de unos 600 mil millones); en las actividades inmobiliarias la mora llegó a 85 mil millones y aún hoy representa 54 mil millones de un crédito total vivo de 150 mil millones (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0413.pdf>) (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0418.pdf>).

El porcentaje de la mora se mantiene muy alta en 2014 (13 %), pero es principalmente porque el crédito total (el denominador) está cayendo. Si los créditos dudosos los dividiéramos por el volumen total que había a finales de 2010, la mora estaría en 2014 cerca del 9 % (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0403.pdf>).

Las políticas contracíclicas implementadas en 2008 llevaron a profundizar la crisis, al negarla, primero y al intentar suplir el agujero creado por el sector inmobiliario con gasto público. En poco más de tres años, el Estado, el sector financiero y muchas empresas privadas se convertían en un grave riesgo para la economía global. España había llevado a cabo una expansión del gasto anual superior a la de China —respecto al PIB— y dejaba deuda, paro y sobrecapacidad.

Una crisis de estallido de burbuja se convirtió en una crisis de balance, donde Estado, empresas y familias se encuentran con un endeudamiento muy superior al aceptable.

Si hacemos un análisis de la economía española tras el estallido de la crisis, una combinación de disciplina financiera y reformas estructurales empieza a cambiar la percepción global del estado de la economía.

## Ahorro

El sector privado y las familias comienzan a ahorrar de manera muy relevante (hasta un 6,39 % del PIB en 2014), mientras la riqueza de los hogares alcanza el 100 % del PIB, gracias en parte a la fortaleza del euro, ya que gran parte de esa riqueza proviene de depósitos. Así, la deuda privada cae hasta niveles de 2006. El déficit comercial del país se reducía en casi 100.000 millones de euros, pasando de un 10 % del PIB a superávit, atajando uno de los mayores desequilibrios de la economía. El compromiso de España de fortalecer su solvencia y encarar reformas estructurales ha sido un catalizador muy importante que ha permitido llevar a cabo un proceso de desapalancamiento y corrección de desequilibrios mientras se empezaba a frenar la destrucción de empleo y se recuperaba el crecimiento.

Es muy relevante el incremento del ahorro ya en 2008 por parte de las familias, llegando al 15 % de la renta disponible; luego empezó a bajar pero se mantuvo porcentualmente en unos niveles aceptables. En el cuarto trimestre de 2014 ha vuelto a crecer otra vez (<http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0414.pdf>).

La deuda total no financiera tocó techo a finales de 2012, en 2,8 billones, y en 2014 se sitúa en 2,7 billones. (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0805.pdf>).

En 2014, las familias redujeron su deuda en 24.000 millones. Por primera vez desde 2003, los depósitos tienen un volumen casi igual al de sus deudas totales (730-740.000 millones) (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0807.pdf>) (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0828.pdf>). Asimismo, las empresas lo redujeron en 50.000 millones (<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0806.pdf>).

En total, es un ahorro del 7,3 % del PIB. A eso hay que restar

el déficit de las administraciones públicas, 5,7%. Así llegamos a un ahorro total de casi el 1,5% del PIB. El sector privado ha hecho los deberes, el público aún muestra desequilibrios relevantes.

Es evidente que han sido los ciudadanos y las empresas las que han salvado a España de una quiebra que parecía evidente en 2007-2008.

## **La reforma financiera y los análisis de riesgo externos**

Los análisis independientes llevados a cabo sobre los activos de la banca fueron un ejercicio esencial de transparencia. Lo que importaba no era la conclusión, sino que la información estuviera a disposición de todo el mundo para valorar riesgos y acotarlos. Ese ejercicio de humildad y transparencia ha sido esencial para recobrar la confianza y atraer capital. El rescate bancario español podría haberse evitado con un reconocimiento anterior de las dificultades de la banca pública. Haber escondido y alargado el problema hizo que el rescate fuera inevitable. A pesar de ello, las ayudas a la banca en España han sido moderadas —a pesar de la magnitud de la burbuja de obra civil e inmobiliaria, que llegaron a pesar un 20% del PIB—. El rescate supone un 6% del PIB. Si incluimos avales y otros esquemas de protección de activos, el rescate se acerca a los 219.400 millones de euros. Sin embargo, esos avales y esquemas no se han ejecutado, por lo cual a la hora de analizar el impacto en las cuentas públicas debemos atenernos a esos 60.000 millones de euros mencionados. Una cifra menor a la del Reino Unido (82.000 millones), Alemania (64.000 millones) o Irlanda (63.000 millones), según la Comisión Europea. En total, entre 2008 y 2012, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han recapitalizado sus respectivos bancos con 591.900 millones de euros, cifra que equivale al 4,6% del PIB comunitario.

En España no ha habido que rescatar a la banca privada, que ha llevado a cabo grandes esfuerzos de recapitalización a través de ampliaciones de capital y desinversiones. Sólo a las entidades públicas y semipúblicas. De hecho, la banca privada ha contribui-

do al fondo de garantía de depósitos para reducir el riesgo sistémico de todo el sector.

## **La reforma laboral**

España no partía de un problema de competitividad —como Francia o Italia— en 2011, pero sí de rigidez del mercado laboral. La reforma laboral conlleva una flexibilización del mercado que ha permitido parar la hemorragia del empleo y empezar a crear puestos de trabajo de manera continuada. Antes de su introducción, necesitábamos crecer casi a un 3 % para crear empleo, en 2014 lo hemos hecho al 1,2 %. Es cierto que una parte importante es empleo temporal, una tendencia que hemos visto de manera similar en la salida de la crisis del Reino Unido o Estados Unidos, pero desde finales de 2011 han aumentado un 19 % los trabajadores con contrato indefinido. Desde 2011 los trabajadores afectados por un ERE (expediente de regulación de empleo) se han reducido en un tercio, y en 2014 la afiliación creció en 417.574 cotizantes frente al año 2013, mientras el paro registrado caía en 253.627 personas en su mejor dato desde 1998. Un dato muy relevante, además, es que tres de cada cuatro contratos en España son indefinidos.

En términos desestacionalizados, en julio de 2013, cuando España tocó fondo, la afiliación a la Seguridad Social era de 16,25 millones; en febrero de 2015 llegaba a 16,87. Un incremento de 620 mil desde mínimos, y con perspectivas de alcanzar los 17,2 millones en 2015.

A pesar de ello, el paro sigue siendo excesivo y las medidas para combatirlo deben continuar.

## **Reducción significativa de la economía sumergida**

Siempre digo que la economía no se sumerge, sino que emerge. Es decir, muchos trabajadores se ven obligados a desarrollar su actividad en la economía irregular, no por gusto, sino por necesi-

dad. Según Friedrich Schneider y la consultora A. T. Kearney, en 2013 la economía sumergida representó en España el 18,6 % del PIB, lo que significa casi un punto menos —unos 10.000 millones de euros— que en 2009 (<http://bit.ly/19z9NWi>), y muy lejos del 21 % de 2006.

A ello ha contribuido también el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), pero no olvidemos que dicho apoyo ya existía —incluyendo compras de bonos soberanos— en 2008-2010 cuando el BCE aumentaba su balance en casi un billón y medio de euros y la Unión Europea lanzaba un plan de estímulo equivalente al 3 % del PIB.

Hoy en España la economía crece por encima del 3 %, se estima la creación de un millón de puestos de trabajo en 2015 y el consumo se recupera mientras la economía —privada y pública— ahorra casi un 1,5 % del PIB. Desde el año 2000 el tamaño del sector público español se ha disparado un 45 %, frente a la media del 20 % que ha registrado la UE-27, tan sólo superado por Luxemburgo. Seguimos gastando un 15 % más de lo que ingresamos y más de 40.000 millones por encima del pico de la burbuja en 2007. Una burbuja que generaba, según el Ministerio de Economía, unos 50.000 millones de euros de ingresos extraordinarios.

## **El recorte en gasto**

Se ha producido fundamentalmente en el área donde se habían llevado a cabo más excesos, la obra pública, con el objetivo de mantener al máximo la estructura del Estado y las partidas de gasto. De todos los programas de ajuste vistos en Europa, en España es donde se ha realizado el menor recorte a las grandes partidas de gasto público (teniendo en cuenta que se llevaba a cabo un ajuste de más de 10 puntos del PIB). Desde que se alcanzó el máximo en 2010, el recorte ha sido equivalente a 19.017 millones (<http://bit.ly/1xrVPAV>). Cuando miramos el consumo público, vemos que la reducción ha sido muy moderada en sanidad (-1,9 % gasto per cápita 2009-2012), pensiones (aumentaron) o educación, donde el gasto por alumno sigue por encima de la OCDE y

dentro de la media de la Unión Europea. Hoy el consumo público representa el 19,1 % del PIB, un porcentaje que todavía —y pese a los recortes— se sitúa por encima de los niveles de 2008, en plena expansión económica, y cuando los ingresos crecían en tasas de dos dígitos.

Así, se ha suplido con subidas de impuestos y mayor recaudación por crecimiento la casi totalidad del agujero en ingresos fiscales creado por el pinchazo de la burbuja. La mal llamada austeridad, que en realidad sólo ha sido la moderación de un gasto excesivo, empieza a dar sus frutos. Pero esas subidas de impuestos para mantener el gasto social y administrativo también han reducido el potencial de crecimiento y de creación de empleo.

Ante un entorno de recuperación frágil, las principales áreas donde centrar el diagnóstico de la economía española a efectos de nuestro debate, en mi opinión son:

- Competitividad.
- Facilidad para crear empresas.
- Deuda y política fiscal.
- Paro y desigualdad.
- Europa y política energética.

## Competitividad

Según el Global Competitive Index del World Economic Forum (<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>), España está en la posición número 35 de todos los países del mundo en términos de competitividad general, precedida por Puerto Rico (32), Chile (33) e Indonesia (34), entre otros países. A la hora de hacer un diagnóstico, conviene resaltar las áreas donde España presenta resultados mejorables.

- En «Instituciones» sorprenden los resultados en «desvío de fondos públicos» (2,8), «confianza pública en políticos» (2,2), «derroche del Estado» (2,5) y «carga de regulación política» (2,8). Todos de un máximo de 7.



- En «Infraestructuras», España se encuentra en la posición número 9, por delante de países como el Reino Unido (10), Estados Unidos (12) e Italia (26).
- En «Educación», España ocupa la posición número 29, con una media de 5,2 puntos sobre 7. Destacan negativamente las puntuaciones recibidas en calidad de educación en matemáticas y ciencias (3,9), y la calidad del sistema educativo en general (3,4). La calidad de las escuelas de negocios, sin embargo, es muy buena (5,9).
- La eficiencia del mercado de bienes es moderadamente baja. En este aspecto España está en la posición número 75, con una puntuación media de 4,3. Destacan negativamente el efecto de políticas fiscales sobre la inversión (2,9), el coste de las políticas agrícolas (3,7) y la sofisticación del consumidor (3,4).
- La eficiencia del mercado laboral es baja. España se encuentra en la posición número 100 en este aspecto, con una media de 3,9. Destacan negativamente los procesos de contratación y despido (3,3), los efectos de políticas fiscales para incentivar el trabajo (2,8), la capacidad del país para retener talento (2,9) y la capacidad de éste para atraerlo (2,8). La flexibilidad de la determinación de salarios es moderada (4,2) y el resultado general para el componente de la flexibilidad es del 4,0 (posición número 120).
- El desarrollo del sistema financiero puntúa ligeramente por debajo del último componente (3,8). Dentro del componente de la eficiencia (3,8), destacan negativamente la facilidad de acceso a préstamos (1,7), la disponibilidad de capital riesgo (2,3). La confianza en los bancos es moderada (4,2) al igual que en el sector en general (4,3).
- La disponibilidad de las últimas tecnologías es alta (5,6) y a nivel de empresa no tanto (4,9). El uso de las tecnologías de información es elevado (5,7).
- La sofisticación de negocio está en la posición número 38, con una media de 4,4. Destaca muy notablemente el resultado negativo que presenta la voluntad general a dele-

gar (3,5). Por otro lado destacan positivamente la calidad y cantidad de proveedores a nivel local (5,0; 5,0). La ventaja competitiva del país es moderada (4,1)

- La innovación en el país puntúa 3,7, con una positiva posición número 37.

Que España se haya situado en la clasificación global como el país número 35 de los 144 estudiados indica la sólida base de la que parte el país, pero asimismo el camino que aún queda por recorrer. La actividad empresarial se ve afectada por una falta de acceso a financiación adecuada, incluyendo capital riesgo, y menos bancarizada, por una regulación del mercado de trabajo aún demasiado estricta, un sistema burocrático que peca de ineficiente, muchas subvenciones que no funcionan y un elevado nivel impositivo. Aspectos que perjudican la competitividad de las empresas españolas y que limitan su potencial de crecimiento.

## **Facilidad para crear empresas**

El informe del Banco Mundial, que clasifica la facilidad para hacer negocios en diferentes países del mundo, colocó en 2012 a España en la posición 33 (The World Bank, Ease of Doing Business [Index <http://espanol.doingbusiness.org/rankings>]). El informe clasifica a otros países europeos que se consideran un ejemplo a la hora de atraer inversores como Suecia o Finlandia en las posiciones 11 y 9, respectivamente. Muchas veces escuchamos a políticos hablar del modelo nórdico y siempre olvidan la importancia de la libertad económica y la facilidad para crear riqueza.

España se sitúa en puesto 49 del Índice de Libertad Económica, aún lejos de países como Finlandia (puesto 19) o Suecia (puesto 23) (<http://www.libertad.org/indice>).

La economía nacional ha perdido puntos al aumentar su gasto público y reducir la libertad laboral y la facilidad de abrir negocios en el último año. La libertad comercial y la menor corrupción han sido dos áreas en las que España ha obtenido ligeros avances. A pesar de ello, la nota de 67,2 puntos de la economía

nacional sobre un máximo de 100 está por encima de la media mundial de 60,3 puntos, si bien es inferior a la europea, con 67,1.

Asimismo España es uno de los países donde es más baja la transición de la pequeña y mediana empresa a la gran empresa. En las dos últimas décadas, la probabilidad de que una pyme incremente el tamaño empresarial de un año para otro y se sitúe como gran empresa es del 8,4 %. Mientras que, la probabilidad de que una gran empresa pase a categoría pyme es del 6,7 % ([https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1203\\_Lafinanciaciondelaspymeenespana\\_tcm346-294961.pdf](https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1203_Lafinanciaciondelaspymeenespana_tcm346-294961.pdf)). ¿Por qué las pymes no pasan el umbral a gran empresa de la misma manera que en otros países? La excesiva intervención de los entes regionales y los sindicatos hacen que el riesgo para el creador de empleo sea demasiado alto, y prefiera quedarse «pequeño y lejos del radar». Todo esto no es fácil de cambiar en un año, pero una sencilla revisión del marco legal e impositivo que incentive al salto a gran empresa sería muy provechosa.

Teniendo en cuenta que las grandes empresas son más productivas, estables y que las pymes encuentran mayores dificultades a la hora de resolver conflictos y negociar contratos, la economía española debe hacer más por facilitar ese cambio.

Para una economía como la española donde casi el 80 % del valor añadido y gran parte del empleo vienen de la mano de las pequeñas y medianas empresas, es esencial avanzar en elementos esenciales como son: facilitar los trámites para apertura de nuevos negocios, proteger a los inversores minoritarios, garantizar el cumplimiento de contratos y resoluciones de insolvencia. La excesiva burocracia y la lenta resolución de conflictos son elementos importantes que reducen la capacidad de la economía de transformarse.

## **Deuda y política fiscal**

Ya hemos comentado el elevado nivel de deuda pública. Pero conviene recordar algo importante a la hora de diagnosticar el problema. España jamás ha recaudado más de 433.000 millones

de euros. Cuando hablamos de deuda y de los problemas estructurales deberíamos recordar esa cifra. Especialmente cuando nos dicen que gastando se va a salir de la crisis y que tenemos un problema de ingresos, no de gastos.

La lucha —necesaria— contra el fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70 % entre la cifra real y la esperada. Unos ingresos «estimados» para unos gastos muy reales. Y cuando se dispara el déficit de nuevo, los impuestos vuelven a subir para todos y los recortes aumentan. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos riesgos.

Intentar recuperar ingresos sólo vía «la lucha contra el fraude» sin atacar el gasto es peligroso, al confiar en unas estimaciones muy cuestionables mientras se mantienen unos gastos ciertos y reales. Además no se recaudaría ni de lejos la cifra necesaria para atajar el desequilibrio de las cuentas, sólo se conseguiría un efecto mínimo de una sola vez, que no soluciona el déficit estructural, de unos 40.000 millones anuales.

Recordemos que un 40 % de la cifra «estimada» por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha (<http://www.gestha.es/archivos/informacion/comunicados/2012/alternativas-de-gestha-a-la-subida-del-iva-y-recortes-del-rdl-20-2012-sin-anexos.pdf>) de aumento de ingresos fiscales viene del incremento de impuestos, no de eliminar el fraude fiscal. Y no olvidemos que nunca en la historia se ha recuperado una cifra superior a 4.000 millones atacando el supuesto fraude. Muy lejos de los 38.000 millones que se comentan de «economía sumergida».

En cualquier caso, ni la cifra más optimista de fraude fiscal —que además sería una cifra recaudada una vez, no anual— cubre el déficit estructural mencionado.

España no puede intentar suplir ingresos de burbuja sacándolo del bolsillo del eficiente y del que ha sobrevivido a la crisis.

Tampoco puede ignorar el hecho de que cada año que incumplimos el objetivo de déficit supone otros 50-60.000 millones más de deuda. No se va a salir de un problema de deuda con mayor endeudamiento. Igual que el sector privado ha ido solucionando su problema adaptándose a un entorno en el que la euforia del pasado da paso a la moderación y la prudencia, lo mismo debe ocurrir en el sector público.

Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios, como si éstos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo, es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en habitual.

Toda esa deuda, barata o no, se tiene que refinanciar en un futuro. La liquidez extrema y la euforia crediticia no duran eternamente. No es correcto decir que no importa el total de deuda mientras el coste sea bajo. Japón, con casi un 240 % de deuda sobre el PIB, se gasta un 22 % de su presupuesto anual en pagar intereses de la deuda a pesar de pagar sólo un 0,6 % por sus bonos a diez años.

Un elemento importante a la hora de entender por qué hay que priorizar el gasto son las pensiones. Un gran problema de España es la demografía. La unidad familiar ha perdido un 44 % de miembros de media desde los años setenta. España ya supera los 9 millones de jubilados y la población activa jamás ha superado los 20,5 millones. Las pensiones ya suponen 127.000 millones de euros, el 36 % del presupuesto. Por lo tanto, para garantizar un sistema de pensiones de reparto se debe a su vez garantizar un gasto público que no ponga en peligro la sostenibilidad de las pensiones.

Precisamente si queremos tener unos servicios públicos de calidad y sostenibles debemos aprender a priorizar y gestionar unos recursos —los impuestos— que no son eternamente crecientes ni pueden ser confiscatorios. Porque ahogar el potencial de la economía para intentar rascar unos euros más de recaudación es mucho más peligroso que incentivar la creación de riqueza y empleo con impuestos bajos.

Y es que, en política fiscal, unos impuestos no confiscatorios son extremadamente importantes. El *think tank* Civismo publica su informe anual ([http://www.civismo.org/files/informes/2014-07-03\\_Informe010\\_Dia\\_Liberacion\\_Fiscal\\_2014.pdf](http://www.civismo.org/files/informes/2014-07-03_Informe010_Dia_Liberacion_Fiscal_2014.pdf)), en el que analiza la fiscalidad del trabajo con una cifra importante: los trabajadores españoles necesitan 184 días de media para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Calcular el número de días que necesitamos trabajar para pagar impuestos es importante porque refleja visualmente, y de una manera inmediata, si el coste del Estado que sostenemos es proporcionado o desproporcionado comparado con los servicios que recibimos y toda la solidaridad que queramos asumir.

El análisis del día de la liberación fiscal es importante porque muestra el nivel de esfuerzo fiscal, que es lo que realmente pagamos en impuestos de nuestro sueldo y que se sitúa en una media del 40,5 %, una de las más altas de la OCDE, y no ese ratio recaudatorio que es la «presión fiscal» que tanto usan los medios de comunicación, que mide la recaudación sobre el PIB.

Este esfuerzo fiscal sigue situando a España por encima de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo, y sólo por debajo de Finlandia o Suecia, donde el sueldo medio es un 70 % superior a la renta de un trabajador español.

Al contrario de lo que se suele comentar, las rentas más altas sufren el mayor esfuerzo fiscal. Un sueldo de 15.500 euros anuales paga impuestos hasta el 16 de junio, uno de 40.000 o 100.000 euros, hasta el 9 y 7 de julio respectivamente.

España sigue siendo el país de Europa con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas (28,3 %), sólo por detrás de Italia (33 %) y Portugal (34,4 %). En Alemania, Francia, Suecia o Bélgica, las cotizaciones fluctúan entre un 16 % y el 20 %. Éste sigue siendo un enorme escollo para la contratación y el empleo.

Los Estados deben evitar acomodarse ante una trampa de exceso de liquidez en Europa y a los tipos bajos y atender a estos retos mencionados. Este exceso de liquidez lleva al riesgo de perpetuar los desequilibrios, y los Estados ignoran los errores de caer en ella. La actitud procíclica de los Estados de utilizar las épocas de bonanza crediticia para endeudarse más es «el error de la ciga-

rra». Cuando se acepta como mantra que tenemos «un problema de ingresos y no de gastos», el diagnóstico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria.

## Paro y desigualdad

La tasa de paro en España —23,4 %— es aún demasiado alta, lo cual genera fragilidad en la economía, lastra la recuperación y reduce el potencial de crecimiento. Incluso si consideramos que un porcentaje relevante de ese paro se encuentra «trabajando» en la economía sumergida, no debe ser una excusa ni solución nada.

Es importante recordar también que España cuenta con un alto nivel de desempleo, a la vez que gasta casi un 0,9 % del PIB en políticas activas de empleo. Un gasto ineficiente a todas luces.

Curiosamente, la desigualdad se ha disparado a la vez que se implementaban mayores planes de estímulo y de protección social.

La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11 % mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos protectores. En la UE-27 se mantuvo a niveles de 2004.

La pobreza crónica en la infancia creció un 53 % en España desde 2004 a 2011, según Ayuda en Acción. La tasa de pobreza infantil en España pasó del 26,2 % en 2007 a casi el 30 % en 2011, subiendo cuatro puntos en cinco años.

Por lo tanto, no es un Gobierno o «los recortes» ni otro y su «política social». Es un problema mayor. Un enorme gasto en protección social (26 % del PIB) que demuestra el fracaso absoluto del asistencialismo y de su administración.

En España, la desigualdad se redujo de un índice de Gini de 35 en 1995 a casi alcanzar la media de la UE (30,7) en 2004. El paro se redujo de manera excepcional gracias al crecimiento y el aumento de la actividad económica. Desde 2004 a 2012 la desigual-

dad aumentó dramáticamente (de 30,6 a 34) cuando en la Unión Europea se mantenía casi constante. Crear empresas y riqueza tiene un efecto mucho más poderoso a la hora de reducir los desequilibrios que las políticas de gasto público.

El crecimiento y el empleo no van a venir de una administración que ya consume casi el 45 % de los recursos del país (PIB) y donde el gasto en empleo público supone un 11,9 % del PIB, superando la media del conjunto de países desarrollados, que es del 11,3 %. Eso sin contar asesores ni empleados de empresas públicas. Tampoco va a venir de las grandes empresas que ya cuentan con una media del 20 % de empleados superior a sus comparables europeos (empleados sobre cifra de negocio en el país, fuente Bloomberg). Llegará del autoempleo y las pymes.

## Europa y política energética

En política energética, Europa y España olvidaron la importancia de la competitividad a cambio de conseguir unos objetivos ambiciosos de energías renovables que —debido a unas subvenciones excesivamente generosas en un periodo de maduración tecnológica inicial— han supuesto una losa a la creación de empleo y riqueza. Los costes de la electricidad son de media un 50 % más altos que en Estados Unidos, y el gas industrial casi un 75 %. Entre 2005 y 2012, los precios del gas en Estados Unidos caían un 66 %, mientras en Europa subían un 35 %. A su vez, en Estados Unidos la electricidad bajaba un 4 % y en Europa se disparaba un 38 %. Curiosamente, en ese mismo periodo Estados Unidos conseguía reducir sus emisiones de CO<sub>2</sub> más que la Unión Europea.

Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad y gas de la OCDE. La media del sector industrial español paga más de dos veces lo que sus comparables americanas.

Las políticas «verdes» y el desarrollo de las renovables han permitido que el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Por ejemplo, en Alemania los precios de generación han bajado casi un 38 % desde 2005 y la factura



eléctrica media ha subido un 60 %. Un error que destruye empleos y empresas y que hay que atajar. En países como España hay que distinguir, por ejemplo, entre eólica, que supone un 20 % de la energía generada en 2013 y un 19 % del coste, y las solares, que suponen sólo un 5 % de la energía producida y un 20 % del coste total de generación.

El objetivo de conseguir una energía limpia y sostenible debe ser compatible con un crecimiento sostenible y con la creación de empleo. Es la diferencia entre una política energética que promueve la eficiencia y la sustitución por bajos costes, con unas medidas que promueven la sustitución forzada desde el subsidio.

En lo que es la economía de la eurozona, la Unión Europea de 2014 es un conjunto de países imperfecto pero muy diferente, y mejor, que lo que era en el periodo 2004-2010. Los episodios puntuales de riesgo político o financiero vistos en Grecia o Chipre o con problemas bancarios han permitido que la Unión Europea reduzca el riesgo sistémico, ponga en marcha mecanismos de emergencia y evite los errores del pasado. El desarrollo gradual de una política común, con verdadera unión, no sólo financiera y monetaria, sino fiscal, pero donde la responsabilidad crediticia de cada país y región sea real y no se diluya. Que no se utilice a las naciones que hacen los deberes para sostener los errores o despilfarros de otros. Como Estados Unidos, un sistema sólido que garantice estabilidad pero con responsabilidad. Donde Texas no corra con el riesgo de los errores de Detroit.

Hoy Europa crece a un ritmo más sólido, liderada por Alemania y España, ya que es un crecimiento generado mientras se ha reducido de manera agresiva el déficit comercial. Pero los mismos problemas demográficos y de productividad que comentábamos afectan a una Unión Europea cuyos políticos parecen querer seguir intentando volver a los excesos de 2004-2007. Así, la eurozona sufre de una alta sobrecapacidad —20 %—, un alto desempleo y de una fiscalidad muy alta, con un gasto público que ya supone el 48,6 % del PIB.

El crecimiento español y europeo sigue siendo frágil, aún por debajo del potencial de la economía.

Ni España ni el resto de Europa pueden esperar milagros de

la política monetaria. Acudir a las recetas mágicas de estímulos monetarios y retrasar las reformas no funcionaría. El Banco Central Europeo puede comprar tiempo, pero no soluciona los desequilibrios de las economías.

El diagnóstico es apasionante. Cada dificultad, cada reto nos muestra una oportunidad. Caer en el pesimismo o el victimismo no soluciona nada. Nos vemos en el debate.